

Arica, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Se sustanció esta causa RIT O-122-2021 del Juzgado del Trabajo de esta ciudad, caratulada “ZARZURI con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHINCHORRO,”, proceso que fue seguido de acuerdo con las reglas del procedimiento ordinario, en la que se dictó sentencia con fecha seis de septiembre del año en curso, que resolvió:

I.- Que, SE ACOGE, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada Ilustre Municipalidad de Arica.

II.- Que, SE ACOGE PARCIALMENTE, la excepción de prescripción deducida por la demandada Servicio Local de Educación Pública Chinchorro y, en consecuencia, se declara como prescrito el derecho a percibir el bono de desempeño laboral por todas las demandantes correspondiente a los años 2017 y anteriores. En este orden de ideas, encontrándose cancelado el bono de desempeño laboral respecto al año 2020, únicamente será condenada a cancelar el bono de desempeño laboral correspondiente a los años 2018 y 2019.

III.- Que, SE ACOGE PARCIALMENTE, la demanda deducida por las actoras condenándose a la demandada Servicio Local de Educación Pública Chinchorro a pagar a cada una de las demandantes el bono de desempeño laboral correspondiente a los años 2018 y 2019.

IV.- Que, el monto a pagar calculado es \$48.520.919, debiéndose pagar a cada una de las demandantes, en la etapa de cumplimiento del fallo.

V.- Que las sumas devengadas en virtud de la Ley N°19.464 se reajustarán y devengarán intereses de conformidad al artículo 63 del Código del Trabajo considerando como fecha de exigibilidad para todos los efectos legales aquella en que esta sentencia quede firme.

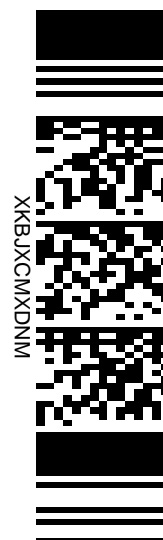
VI.- Que se rechaza la demanda en cuanto a las sumas referentes al bono de menores rentas (artículo 59 Ley N°20.883 y modificaciones posteriores).

VII.- Que, no se condena en costas a la demandada Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar y no haber resultado completamente vencida.

Contra ese fallo, el abogado Claudio Fuentes Lira, por las demandantes, y el abogado Henry Yong Cerda, por la demandada Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, se alzaron deduciendo recursos de nulidad, ambos fundados en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo de Arica.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad deducido por las demandantes



PRIMERO: Que los demandantes fundaron el recurso de nulidad en la causal contenida en el artículo 477 en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, fundada únicamente en lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo.

Expone que el 23 de julio de 2021, dedujo demanda de cobro de prestaciones, con el objeto de que SS. declara que las demandadas, la Ilustre Municipalidad de Arica y el Servicio Local de Educación de Chinchorro, por ser el continuador legal de la Ilustre Municipalidad de Arica a contar del 1 de enero de 2020, ambas en calidad de empleadora de sus representadas, les adeuda prestaciones de origen legal a las que tienen derecho. La prestación demandada es el Bono de Desempeño Laboral, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 20.717, 20.799, 20.883, 20.971, 21.050, 21.126; 21.196 y 21.306.

Las demandadas contestaron argumentando, en general, que la Ilustre Municipalidad de Arica y el Servicio Local de Educación de Chinchorro, nada adeuda a las demandantes por concepto de bono de desempeño laboral, y que no se encontrarían obligadas a pagar el referido estipendio, salvo asignación de recursos por la autoridad respectiva. A su vez, ambas opusieron la excepción de prescripción del artículo 510 del Código del Trabajo, ya que, a su juicio, las prestaciones estarían prescritas.

Se confirió traslado a su parte respecto de las excepciones de prescripción y de falta de legitimidad pasiva opuestas por la Ilustre Municipalidad de Arica por el Servicio Local de Educación de Chinchorro, respecto de las que solicitó su rechazo.

Al respecto, se argumentó, en términos generales, que, en la especie, no se cumplirían los presupuestos del artículo 510 del Código del Trabajo, que relaciona la prescripción a los derechos regidos por dicho cuerpo normativo, en circunstancia que la prestación que se reclama no tiene su origen en dicho Código, sino en una norma especial. Adicionalmente, se argumenta que la prestación reclamada no tiene la naturaleza de una remuneración, además de no ser tributable ni imponible. Todo lo anterior, independientemente de que la relación de sus representadas, la I. Municipalidad y el Servicio Local de Educación se rija por el Código del Trabajo.

En definitiva, se indica que se trata de una prestación que se otorga por medio de una ley especial, por lo que la excepción de prescripción tendría que haberse fundado conforme a lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil, y al no haberse hecho, se entiende que no procedería su aplicación. En ambos casos, adicionalmente se hace presente el artículo 8° de la Ley N° 21.226.



El Tribunal acoge la demanda de cobro de prestaciones interpuesta en contra de la Municipalidad de Arica y el Servicio Local de Educación de Chinchorro, obligando sólo a esta última a pagar a cada una de las demandantes el Bono de Desempeño Laboral correspondiente a los años 2018 y 2019. Y respecto de lo que importa al presente recurso, acoge la excepción de prescripción opuesta por la contraria, con los detalles que se enunciarán más adelante. En cuanto a la Ilustre Municipalidad de Arica, se acoge la excepción de legitimidad pasiva eximiéndola de toda condena.

Funda su RECURSO DE NULIDAD en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su vertiente de infracción de ley que influye en lo dispositivo del fallo, en cuanto incurre en una infracción de ley, en concreto infracción a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, en cuanto no es posible aplicar dicha regla a este caso concreto.

Sin embargo, la sentencia determina que se debe aplicar la regla del artículo 510 del Código del Trabajo, declarando por lo tanto que las obligaciones legales anteriores al año 2018 se encuentran prescritas y, como consecuencia de ello, no pueden ser perseguidas por su parte en contra del Servicio Local de Educación de Chinchorro, es decir, operaría la prescripción extintiva, y no pueden ser cobradas las prestaciones reclamadas con anterioridad a la fecha que indica el fallo.

Reproduce el recurrente los considerandos vigésimo sexto y vigésimo séptimo de la sentencia impugnada, conformes los cuales ACOGE PARCIALMENTE, la excepción de prescripción deducida así como declarando prescrito el derecho a percibir el bono de desempeño laboral por todas las demandantes correspondiente a los años 2017 y anteriores y en este orden de ideas, encontrándose cancelado el bono de desempeño laboral respecto al año 2020, únicamente la condenada a cancelar el bono de desempeño laboral correspondiente a los años 2018 y 2019.

A su vez, SE ACOGE PARCIALMENTE, la demanda deducida (...) condenándose a la demandada Servicio Local de Educación Pública Chinchorro a pagar a cada una de las demandantes el bono de desempeño laboral correspondiente a los años 2018 y 2019.”

Pues bien, sostiene que el artículo 510 del Código del Trabajo dispone: *“Artículo 510. Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”*, siendo entonces evidente que el fallo desestima el tenor literal de dicha norma, ya que al estimarla aplicable al caso concreto, se infracciona la ley de manera palmaria, dejando sin poder cobrar una cantidad importante de asignaciones determinadas en la ley en



favor de sus representadas, influyendo por lo tanto la infracción reclamada en lo dispositivo del fallo, provocando, además, un perjuicio solo subsanable con la nulidad de la sentencia y la correspondiente dictación de una sentencia de reemplazo, que enmiende el yerro cometido por la interpretación legal deficiente que se ataca por el presente arbitrio.

Sostiene que la correcta forma de interpretar la norma del artículo 510 del Código del Trabajo, es preciso aplicar las reglas de hermenéutica contempladas en el Código Civil, especialmente la del artículo 19, que en su inciso primero establece que *“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”*.

Por otro lado, la jurisprudencia nacional está conteste en considerar que la norma del artículo 510 se aplica a los derechos regidos por el Código del Trabajo, y no a las referidas leyes especiales, independiente de la existencia o no de una relación laboral sujeta a las normas del Código del Trabajo, tal como ocurre en el caso de autos, en cuyo caso se deben aplicar las normas comunes de prescripción de los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, al ser derechos contenidos en ley especial.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema, en fallo de unificación de Jurisprudencia cuya materia objeto de juicio era la determinación de la aplicación de las reglas de prescripción respecto del pago de una prestación establecida por ley, determinó lo siguiente: **“Octavo:** *Que, por las consideraciones antes dichas, y habiendo determinado la interpretación que esta Corte estima acertada respecto de la materia de derecho objeto del presente juicio, en el sentido que, los derechos de orden laboral que se establezcan en una ley especial que no contemple una norma específica sobre su prescripción, lo harán conforme a las reglas del derecho común, razón por la cual el recurso de unificación de jurisprudencia será acogido, e invalidada la sentencia impugnada, en la forma que se dirá.”* Corte Suprema, Fallo causa rol N° N°27.621-2016, de 07 de noviembre de 2016.

En el mismo fallo, en el considerando séptimo, la Excma. Corte Suprema recalca la aplicación de la regla de interpretación de las normas laborales, usando para ello el principio protector que debe primar en cualquier decisión que se adopte en este tipo de materias, y si no se contempla un plazo de prescripción especial en la norma, se deben aplicar las normas comunes, las que en este caso ni siquiera fueron alegadas en tiempo y forma por la contraria. El considerando séptimo del referido fallo, señala lo siguiente:

“Séptimo: *Que, por consiguiente, y tal como ocurre en la especie, la Ley N°19.933 no contempla un plazo de prescripción especial para el beneficio laboral*



antes descrito, por lo que, conforme a los artículos 1 y 5 del Código del Trabajo, sobre la base del principio de protección que debe primar en cualquier decisión que se adopte en este tipo de materias, para resolver una controversia sobre la concurrencia de un determinado derecho de un trabajador, corresponde dirimir en favor de la aplicación de las reglas del derecho común, es decir, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.515 del Código Civil, en relación, al 2.514 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de prescripción para las acciones ordinarias de cinco años, contado desde que la obligación se hubiere hecho exigible.

En consecuencia, la sentencia impugnada ha incurrido en el yerro que se denuncia, al aplicar el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 510 del Código del Trabajo, al derecho que se pretende, contemplado en la Ley N° 19.933, no obstante que el mismo, emana de un cuerpo legal especial.

En razón de lo anterior, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado subsidiariamente en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación al artículo 510 del mismo cuerpo legal, debió ser rechazado, validando de esta manera la interpretación que había efectuado la sentencia de base en relación a la prescripción.”

Señala que el mismo razonamiento fue recogido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, quien tras conocer de la misma acción intentada en autos, en causa RIT O-115-2021, caratulada “González con Municipalidad de Valdivia”, resolvió al afecto, en la sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, que:

“Que encontrándose establecido que el bono de desempeño laboral no constituye remuneración para ningún efecto legal, no resulta aplicable el inciso 1° artículo 510 del Código del Trabajo. Tampoco resulta aplicable el inciso 2° de la norma legal citada, desde que el derecho no proviene de un acto o contrato, sino de diversas leyes.

Que dichas leyes –ya mencionadas- no contemplan una norma especial de prescripción de la acción para reclamar el pago del bono de desempeño laboral, y por tanto resulta aplicable la norma general establecida en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, es decir, cinco años desde que la obligación se hizo exigible” (Considerando Undécimo).

Si el Juez hubiera aplicado correctamente las normas de prescripción contenidas en lo dispuesto en el artículo 2515 en relación al 2514 del Código Civil, y a la luz de los principios protector y pro operario, que impregnan el derecho laboral, el resultado de lo obtenido en juicio por las demandantes habría sido totalmente distinto, ya que habría tenido que rechazar la excepción de prescripción opuesta por la contraria y, en consecuencia, nuestras representadas podrían



acceder percibir el pago de las prestaciones adeudadas de los años 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015 a lo menos.

Pide se anule la sentencia recurrida, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, que acoja la demanda en todas sus partes y que declare expresamente que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la contraria, y que se le condena en costas de la instancia y del recurso.

SEGUNDO: Que en el considerando décimo octavo de la sentencia reclamada fueron establecidos los hechos, los que no han sido impugnados, habiendo quedado determinado asentado entonces que: "1.- Que las demandantes prestan servicios en calidad de asistentes de la educación en diversos jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 2.- Que todas las actoras ingresaron a prestar servicios para la Ilustre Municipalidad de Arica, en las fechas indicadas en la demanda, siendo la actora con vinculación más antigua aquella iniciada con fecha 05 de enero de 1998 y la más reciente el 01 de octubre de 2018. 3.- Que todas las actoras pasaron a cumplir funciones a partir del día 01 de enero de 2020 para el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro. 4.- Que, el dictamen N°3.278, de 2020, emanado de la Contraloría General de la República, indica: "Es útil hacer presente que de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General contenida, entre otros, en el dictamen N°22.138, de 2015, los servidores que se desempeñan en jardines infantiles, financiados con aportes de la JUNJI, y administrados directamente por municipalidades, y que realizan alguna de las labores señaladas en el artículo 20 de la ley N° 19.464, son asistentes de la educación y su relación contractual, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la ley N° 19.464, se rige por el Código del Trabajo, no obstante encontrarse afecta en cuanto a permisos y licencias médicas a las normas establecidas en la ley N° 18.883".

TERCERO: Que así, la cuestión planteada por el recurrente dice relación con la aplicabilidad del artículo 510 del Código del Trabajo en relación con la prescripción extintiva, lo que fundamentó en la circunstancia que los derechos reclamados provienen de leyes especiales y no de aquellos regidos por el Código del Trabajo y, en consecuencia, debían aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil, que en todo caso, tampoco fueron invocadas por las demandadas.

CUARTO: Que, con prescindencia de la norma que no considera remuneración para ningún efecto legal el referido bono, establecido que fue que las trabajadoras están sujetas a la legislación del Código del Trabajo, siendo éste su estatuto protector, al que por lo demás se ha ocurrido para obtener el amparo



de sus derechos, resulta pertinente entonces la aplicación del citado artículo 510 del Código del Trabajo, habiendo así operado la prescripción establecida en la sentencia impugnada, del modo señalado por el sentenciador en los términos que razonó en los considerando vigesimosexto y vigésimo séptimo de su sentencia y particularmente en tanto razona que: *“En cuanto al estatuto jurídico aplicable a estos trabajadores, el artículo 4 de la ley N° 19.464 establece expresamente que “El personal de asistentes de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas, no obstante regirse por el Código del Trabajo, estará afecto en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 18.883 y sus remuneraciones se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público, siendo dicho reajuste de cargo de su entidad empleadora.”*

Si bien es efectivo que los bonos reclamados en la demanda y reconocidos en la sentencia se encuentran contemplados en normas distintas al Código del Trabajo, el inciso 1° del artículo 510 citado se estima aplicable por cuanto los bonos aludidos debían pagarse a las actoras por los servicios personales prestados con ocasión de la relación laboral que las vincula a su empleador, encontrándose determinado que las trabajadoras están sujetas a la legislación del Código del Trabajo, siendo éste su estatuto protector, al que por lo demás se ha ocurrido para obtener el amparo de sus derechos, resulta pertinente entonces la aplicación del citado artículo 510, habiendo así operado la prescripción establecida en la sentencia impugnada, del modo señalado por el sentenciador en los términos que razonó.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la demandada Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro

QUINTO: Que don Henry Yong Cerda, por la demandada Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, también dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva fundado en la causal prevista en el artículo 477 del código del trabajo, por haberse dictado con infracción de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo:

Como cuestión previa, señala que la Ley N° 21.040, publicada en noviembre de 2017, creó el Sistema de Educación Pública, cuyo objeto es que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, que formen parte de los Servicios Locales de Educación Pública, una educación pública, gratuita y de calidad.

En virtud, del artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.040, se establece el traspaso del sistema educacional que prestan las Municipalidades directamente o



a través de las Corporaciones Municipales, creadas por Decreto con Fuerza de Ley N°1-3.063/1980, a los Servicios Locales de Educación Pública, en la oportunidad, forma y condiciones establecidos en los artículos transitorios correspondientes.

Conforme a lo prescrito en artículo 16, quinto y sexto transitorio, todos de la Ley N° 21.040, se dictó el Decreto N° 72 de 2018, del Ministerio de Educación, que fijó la competencia territorial y fecha de inicio de funciones del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, fijándose como competencia territorial de este, las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos, y como fecha de entrada en funcionamiento el 3 de enero de 2019. Como consecuencia de lo anterior y conforme lo prescrito por el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.040, se traspasó por el sólo ministerio de la Ley, con fecha 1 de enero de 2020, el servicio educacional, correspondiente a las comunas referidas.

En cuanto a las normas legales infringidas en la sentencia recurrida, señala el sentido y alcance de los artículos 29 de las leyes 21.050, 21.126 y 21.405, 30° transitorio, 34° transitorio de la Ley 21040, 4° del Código del Trabajo, 3, 13, 19 y siguientes del Código Civil; y demás normas legales que se mencionan, en cuanto a las normas que conceden el bono de desempeño laboral y en cuanto a las disposiciones transitorias de la ley 21.040 y la falta de legitimación pasiva del Servicio Local de Chinchorro.

Respecto de las primeras, esto es, en cuanto a las normas que conceden el bono de desempeño laboral (artículos 29 de las leyes 21.050, 21.126 y 21.405, leyes art. 50 de la ley 21.109).

El artículo 29 de la ley 21.050, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, para el año 2018, dispone lo siguiente:

“Artículo 29.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario denominado "bono de desempeño laboral", destinado al personal asistente de la educación que se desempeñaba, al 31 de agosto del año 2016, en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, aun cuando sean traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública, o en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980.

Para los efectos de determinar el valor que percibirán por este beneficio, el Ministerio de Educación establecerá un indicador de carácter general denominado "indicador general de evaluación", el cual estará compuesto por la sumatoria de cuatro variables, a las cuales se les asignará un porcentaje de cumplimiento. Las



mencionadas variables y sus respectivos porcentajes de cumplimiento serán los siguientes:

a) *Años de servicio en el sistema:* esta variable representará el 30% del total del indicador general de evaluación. Accederán a dicho porcentaje los asistentes de la educación que tengan diez años o más de servicio en el sistema. Quienes posean una antigüedad menor a la mencionada, sólo percibirán el 15% del total del indicador general de evaluación por esta variable.

b) *Escolaridad:* esta variable representará el 20% del valor total del indicador general de evaluación. Accederán a dicho porcentaje quienes hayan obtenido su licenciatura en educación media. Quienes no cumplan el mencionado requisito sólo podrán acceder al 10% del total del indicador general de evaluación por esta variable.

c) *Asistencia promedio anual del establecimiento:* esta variable representará, en su valor máximo, el 30% del total del indicador general de evaluación. Accederán a dicho porcentaje quienes tengan una asistencia promedio anual al establecimiento en donde se desempeñan del 90% o más. Si el porcentaje de asistencia fuese menor al mencionado, se asignará por esta variable sólo el 15% del valor total del indicador general de evaluación.

d) *Resultados controlados por índice de vulnerabilidad escolar del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) por establecimiento,* considerando el último nivel medido entre los años 2015 y 2016: esta variable representará el 20% del valor del indicador general de evaluación. Accederán al mencionado porcentaje aquellos asistentes de la educación que se encuentren dentro del 30% de mejor desempeño en los resultados del SIMCE. A los asistentes que se desempeñen en establecimientos que se encuentren fuera de aquel rango, sólo se les asignará el 10% del valor total del indicador general de evaluación.

El valor del bono de desempeño laboral será de \$268.465.- para los asistentes de la educación que, por la sumatoria de las 4 variables indicadas, obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación. En el caso de aquellos asistentes de la educación que obtengan un resultado menor al 80% pero superior al 55% por la sumatoria de las 4 variables, el bono que percibirán será de \$205.435.-. Cuando el resultado del índice general de evaluación sea igual o inferior al 55%, el bono será de \$157.577.”

Similar redacción tiene el art. 29 de la Ley 21.126 sobre reajuste para el año 2019 y las demás disposiciones consagradas en leyes de la misma naturaleza, en lo que se refiere al bono de desempeño laboral.



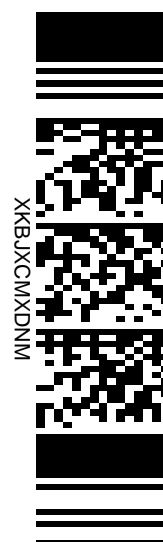
Conforme a la normativa concerniente a la mencionada bonificación, ésta es improcedente en lo que dice relación al Servicio Local demandado. En efecto, las demandantes accionan sobre el bono de desempeño laboral correspondiente a las leyes N° 20.717, 20.799, 20.883, 20.971, 21.050, 21.126, 21.196 y 21.306, todas -a excepción de la última- dictadas con anterioridad al traspaso de la educación pública al Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, traspaso que se produjo con fecha 01 de enero de 2020. El fallo recurrido acoge la demanda y ordena el pago del bono respecto a los años 2018 y 2019, contenido en las leyes 21.050 y 21.126.

El artículo 50 de la ley N° 21.109, dispone en lo pertinente que los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y los regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que tengan un contrato vigente al 31 de agosto de cada año, podrán recibir, anualmente, un bono de desempeño laboral de hasta diez unidades de fomento, para aquellos trabajadores con una jornada laboral de 44 horas semanales, el que será proporcional para los funcionarios con una carga horaria menor a la recién enunciada.

Agrega en su inciso sexto que los beneficiarios del bono de desempeño laboral serán determinados en el mes de octubre de cada año, mediante resolución de la Subsecretaría de Educación, a quien corresponderá su administración, concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar.

En consecuencia, cabe afirmar que los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales regidos por el Decreto con Fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y los regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación (educación técnico profesional), podrán recibir anualmente un bono de desempeño laboral, dejando de manera clara y precisa, que el Bono de desempeño laboral, beneficiará sólo al personal asistente de la educación de los establecimientos que impartan niveles o modalidad de enseñanzas regidos por los DFL N° 2, de 1998 y DL N° 3.166, de 1980, excluyéndose por tanto, a los Jardines Infantiles VTF, que no imparten la educación circunscrita en los cuerpos normativos antes mencionados, recordando que los VTF se financian con los recursos que les transfiere directamente la JUNJI y no tiene la calidad de establecimientos educacionales subvencionados.

Por lo demás, conforme el artículo 50 de la Ley 21.109, los beneficiarios del bono de desempeño son determinados en el mes de octubre de cada año,



mediante una resolución de la Subsecretaría de Educación, a quien le corresponderá su administración, concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar.

Resulta pertinente indicar, en lo concerniente al pago del bono de desempeño laboral, que el artículo 49 de la ley N° 21.109, al regular las remuneraciones de los asistentes de la educación con desempeño en jardines infantiles financiados por la JUNJI, dispuso, que su remuneración sería determinada de acuerdo con las normas del Código del Trabajo, y que aquellos tendrían derecho al estipendio previsto en el artículo 3° de la ley N° 20.905, y a la asignación de experiencia, en las condiciones que allí se indican, sin aludir, sin embargo, al bono de desempeño laboral que se encuentra previsto en el artículo 50 del mismo texto legal, motivo por el cual no cabe sino concluir que, respecto de tal personal, no resulta procedente su pago de la forma en que ha sido demandado.

Estando en vigencia la Ley 21.040, que efectuó el traspaso de la educación pública al Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, la única ley de reajuste que se dictó antes de la demanda fue la ley N° 21.306, de 29 de diciembre de 2020, que en su artículo 29, indica que, durante el año 2020, el componente variable del bono de desempeño laboral establecido en el Párrafo 3° del Título III de la Ley N° 21.109 será determinado de acuerdo al grado de cumplimiento del “indicador general de evaluación” establecido en el artículo 29 de la ley N° 21.196, considerando las variables y porcentajes de cumplimiento señalados en el inciso segundo de dicho artículo.

Con fecha 22 de diciembre de 2021, esto es, con posterioridad a la demanda y a la contestación, se publica la ley N° 21.405 que otorgó reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concedió aguinaldos que señala, concedió otros beneficios que indica, y modificó diversos cuerpos legales. Ésta, en su artículo 29 señala en lo pertinente lo siguiente: *“Durante el año 2021, otorgase a los asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, dependientes de un servicio local de educación pública o dependientes de un Departamento de Administración de Educación Municipal, Dirección de Educación Municipal o Corporación Municipal de Educación, el bono a que se refiere el artículo 50 de la ley N° 21.109, según lo dispuesto en el inciso anterior. Asimismo, concédase a los asistentes de la educación señalados en el inciso anterior, el bono de desempeño laboral otorgado durante el año 2020, según lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 21.306. Este bono será pagado en dos cuotas, en los meses de diciembre de 2021 la primera*



cuota y en marzo de 2022 la segunda cuota a los asistentes de la educación con derecho al mismo y que se encuentren en servicio a la fecha de su pago. Para el año 2021, los beneficiarios del bono de desempeño laboral serán determinados en el mes de diciembre de ese año, mediante resolución de la Subsecretaría de Educación.”

Luego, como se deja constancia en la sentencia definitiva recurrida, durante el año 2022, el SLEPCH pagó el bono de desempeño laboral a las demandantes, correspondiente a los años 2020 y 2021, en la forma prevenida en la referida Ley N° 21.405.

En atención a lo señalado, la demanda no debió prosperar, debiendo destacarse que las leyes de presupuesto dictadas en diciembre de cada año, anteriores a la Ley N° 21.405, carecían de una norma específica como la del artículo 29 de la citada ley, razón por la cual, si la Ley N° 21.405 contiene una norma expresa beneficiando a las trabajadoras de autos, es porque anteriormente, en las leyes de presupuesto dictadas los años anteriores al año 2021 no se las contemplaba como acreedoras de dichos bonos o asignaciones.

Tal como lo indica la Ley N° 21.405, artículo 29, *“Para el año 2021, los beneficiarios del bono de desempeño laboral serán determinados en el mes de diciembre de ese año, mediante resolución de la Subsecretaría de Educación”.*

En tal entendido su representada obró conforme a derecho procediendo al pago de las prestaciones en la forma y respecto de las personas que se determinó por el Ministerio respectivo.

De un análisis armónico de las normas mencionadas, se desprende que al amparo de las normas que conceden el bono de desempeño laboral (leyes de reajuste y art. 50 de la Ley 21.109), no consideran al personal que se desempeña en establecimientos financiados vía transferencia de fondos por la JUNJI, como beneficiarios de esta asignación, y cuando el legislador les otorgó este beneficio, lo realizó en forma expresa para los años 2020 y 2021.

Luego, en cuanto al segundo motivo de impugnación bajo la causal de nulidad invocada, esto es, en relación a las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.040 y la falta de legitimación pasiva del Servicio Local de Chinchorro, sostiene que el traspaso de la prestación del servicio educacional a su representada, ocurre en virtud de un mandato legal, a partir de la dictación de la Ley N° 21.040, la que en su artículos transitorios, regula las fechas de puesta en marcha de cada Servicio Local, el traspaso del personal, de bienes, convenios y mecanismos de saneamientos de deudas, todo esto expresamente regulado, por la mentada normativa.



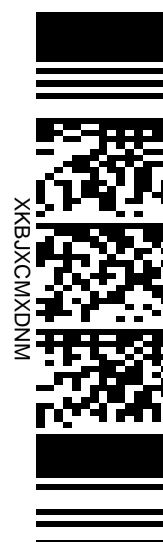
En este contexto, los artículos, cuarto, undécimo, vigésimo primero, transitorios entre otros, de la Ley N° 21.040 y la historia del citado cuerpo legal, el servicio local es sucesor legal del municipio o corporación municipal respectiva, sólo en lo que respecta a la prestación del servicio educacional, sin que esto implique, que la calidad de sucesor legal, lo haga responsable del cumplimiento de las obligaciones contraídas por su antecesor, en este caso la I. Municipalidad de Arica, pudiendo éstas ser pagadas por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública y descontadas al Municipio respectivo.

A este respecto, transcribe los considerandos trigésimo primero y trigésimo segundo de la sentencia impugnada, en los que el juez *que el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro es el continuador legal del Departamento de Educación de la Municipalidad de Arica asumiendo la calidad de sostenedor y empleador de los funcionarios y personal de los establecimientos que dicho Municipio sostenía, incluidas las actoras, para todos los efectos y que las demandantes, en su calidad de personal de establecimiento educacional, fue traspasada al Servicio Local de Educación Chinchorro, por el solo ministerio de la ley, sin solución de continuidad, de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 8° de las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.040, se configura la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada Ilustre Municipalidad de Arica, por cuanto el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, es el actual sostenedor y empleador de las actoras.*

Precisa el recurrente que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, comienza la instalación en el ámbito educacional de una nueva institucionalidad, conformada por el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, y los Servicios Locales de Educación Pública.

La naturaleza jurídica del organismo que representa, se contiene en el artículo 16 del referido cuerpo legal, el cual indica *“Créanse los Servicios Locales de Educación Pública que se señalan a continuación como órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, los que se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación”.*

Conviene considerar la naturaleza jurídica de la Dirección de Educación Pública, creada por la misma ley en su artículo 59, indicando: *“Créase la Dirección de Educación Pública como servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que disponga para el cumplimiento de su objeto y por razones de buen servicio.”*



En virtud del artículo cuarto transitorio de la citada normativa, se establece el traspaso del sistema educacional que prestan las Municipalidades, directamente o a través de las Corporaciones Municipales creadas por Decreto con Fuerza de Ley número 1-3.063 de 1980, del Ministerio del interior, a los Servicios de Educación Pública, creados en conformidad al artículo 16 de la Ley N° 21.040, en la oportunidad, forma y condiciones establecidos en los artículos transitorios correspondientes, es decir, el traspaso opera por mandato legal, en la forma y condiciones que impone el mentado cuerpo legal.

Destaca al respecto que, conforme lo prescrito en el artículo 16, quinto y sexto transitorio, todos de la Ley N° 21.040, se dictó el Decreto número 72 de 2018, del Ministerio de Educación, que fija la competencia territorial y fecha de inicio de funciones, del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, fijándose como competencia territorial de éste, las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos.

Como consecuencia de lo anterior y conforme lo prescrito por el artículo octavo transitorio, inciso segundo y tercero, se traspasó por el sólo ministerio de la Ley, con fecha 1 de enero de 2020, el servicio educacional, correspondiente a la comuna de Arica, lo que considera el traspaso de los bienes muebles e inmuebles y de los trabajadores asociados a la prestación del servicio educacional, entre estos, las demandantes.

De los artículos, cuarto, noveno, vigésimo primero, trigésimo y trigésimo cuarto transitorios de la Ley 21-040 y la historia de la misma, se desprende que el servicio local es sucesor legal del municipio o corporación municipal respectiva, sólo en lo que respecta , a la prestación del servicio educacional, sin que esto implique, que la calidad de sucesor legal, lo haga responsable del cumplimiento de las obligaciones contraídas por su antecesor, en este caso la Municipalidad de Arica, las que en último caso, serán pagadas por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública y descontadas al Municipio respectivo, del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), de las retenciones realizadas de la subvención del Estado a establecimientos educacionales por no pago de obligaciones previsionales o del fondo común municipal y no pagadas por la Dirección de Educación Pública, como erróneamente interpreta el tribunal de la instancia.

Con el fin de resguardar la continuidad del servicio educativo y velando por el derecho a la educación, se estableció el carácter de sucesor legal en la calidad de sostenedor, pero en ningún caso como continuador legal de acuerdo a los términos del artículo 4 del Código del Trabajo.



El artículo trigésimo cuarto transitorio, de la citada ley expresa: *“Informe financiero del servicio educativo municipal previo al traspaso. Cada municipio o corporación municipal, haya o no haya suscrito el Plan de Transición, deberá entregar al Ministerio de Educación un informe completo y actualizado a la fecha de su entrega sobre el estado financiero del servicio educativo a su cargo, en un plazo no superior a ciento ochenta días ni inferior a sesenta días previo al traspaso del servicio educacional. Las municipalidades que traspasen el servicio educacional el año 2018 deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo dentro del plazo de sesenta días previo al traspaso de dicho servicio.*

Este informe deberá contener:

i. El resultado de una auditoría externa realizada por una institución registrada para tales efectos en la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad al título XXVIII de la ley N° 18.045. Los recursos para estos efectos deberán estar contemplados en el respectivo convenio de ejecución, de acuerdo a lo señalado en el artículo vigésimo quinto transitorio.

ii. El estado de pago de las obligaciones descritas en los literales a) y b) del artículo trigésimo transitorio, más los intereses y reajustes, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.

iii. El estado de pago de las remuneraciones que correspondan a los profesionales de la educación regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, a los asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464, que se desempeñen o se hayan desempeñado en establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades o a través de corporaciones municipales, y al personal que se desempeña o se haya desempeñado en los respectivos Departamentos de Administración de Educación Municipal o en la gestión educacional de las corporaciones municipales según corresponda.

iv. El estado de pago de las obligaciones descritas en el literal c) del artículo trigésimo transitorio de la presente ley, más los intereses y reajustes, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.

La información a que se refiere el inciso anterior deberá encontrarse actualizada a la fecha en que se remita al Ministerio de Educación, el que podrá complementarla con la que le proporcionen la Superintendencia de Educación u otros organismos públicos. En caso de que el informe dé cuenta de la existencia de saldos impagos respecto de las obligaciones señaladas en los numerales ii y iii precedentes, la municipalidad o corporación municipal deberá pagar dichas deudas, las que serán siempre de su exclusiva responsabilidad, y por tanto continuará siendo, para todos los efectos legales, la obligada al pago de estas



deudas hasta su total extinción. En caso de que la municipalidad o corporación municipal no pague total o parcialmente dichas deudas antes del traspaso del servicio educacional, el Ministerio de Educación, con autorización de la Dirección de Presupuestos, pagará directamente a las instituciones o a las personas que corresponda las obligaciones señaladas en el numeral ii, y podrá siempre pagar, en las mismas condiciones, las obligaciones establecidas en el numeral iii. En el caso de que se haya efectuado el pago en los términos del inciso anterior, el Ministerio de Educación deberá exigir la restitución de lo pagado por dichos conceptos, de acuerdo a las reglas establecidas en los incisos siguientes. Los recursos fiscales que se utilicen para el pago de las deudas referidas en el inciso cuarto podrán ser descontados del Fondo de Apoyo a la Educación Pública establecido en el artículo trigésimo séptimo transitorio de la ley N° 20.845. Con el mismo fin, el Ministerio de Educación podrá dejar sin efecto las retenciones de subvenciones que haya aplicado a la municipalidad o corporación municipal respectiva en virtud de la normativa educacional vigente, con el solo objeto de que estos recursos se destinen a pagar directamente por el Ministerio las obligaciones señaladas en el inciso cuarto.

En caso de no cubrirse la totalidad de dichos recursos fiscales, el remanente será descontado de los montos que a la municipalidad respectiva le corresponda percibir por su participación en el Fondo Común Municipal, establecido en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, desde el año inmediatamente siguiente a aquel en que se realicen los mencionados pagos. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con visación de la Dirección de Presupuestos, deberá determinar el plazo y el número de cuotas en que se descontarán los recursos por este concepto y lo informará al Servicio de Tesorerías para que éste proceda al descuento. Para todos los efectos, este informe se entenderá comprendido dentro de la rendición del convenio de ejecución correspondiente, suscrito entre el municipio o corporación municipal respectiva y el Ministerio de Educación, de acuerdo a lo señalado en el artículo vigésimo quinto transitorio de la presente ley”.

De las normas transcritas, se desprende que la deuda municipal generada por concepto de la prestación del servicio educacional, específicamente las obligaciones por concepto de remuneraciones, anteriores al 1° de enero de 2020, incluyendo las bonificaciones devengadas los años 2018 y 2019 por bono de desempeño laboral, pueden ser pagadas por el Ministerio de Educación, con cargo



al respectivo municipio o corporación municipal, pero en ningún caso con cargo al presupuesto de los nuevos Servicios Locales de Educación.

Por consiguiente, el SLEPCH está impedido por texto legal expreso de pagar las deudas por concepto las asignaciones demandadas que se devengaron durante la vigencia de la relación laboral entre las demandantes y el municipio demandado. Si se interpretara que las deudas deben ser traspasadas a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, éstos comenzarían sus funciones desfinanciados, para ello existen precisamente los instrumentos de saneamiento financiero que se señalaron. Cualquier interpretación en contrario S.S., pone en riesgo la continuidad del servicio, y frustra el objeto que la ley les impone a los Servicios Locales, esto es, proveer el servicio educacional, velar por la calidad, la mejora continua y la equidad de este servicio, proveer apoyo técnico pedagógico y apoyo a la gestión de los establecimientos educativos a su cargo.

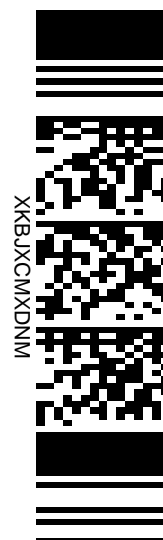
Señala que el principio de especialidad, está consagrado en los artículos 4 y 13 del Código Civil, en los siguientes términos:

“Art. 4º. Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código”.

“Art. 13. Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición”.

Tal regla de especialidad es aceptada por la unanimidad de la doctrina para el art. 13 del Código Civil, y es posible visualizarla en expresiones tales como *“disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares”*; del texto del art. 13, es posible inferir la especialidad, y además, entre dicha frase y la expresión *“disposiciones generales”*, a las que se refiere el artículo de forma expresa. En efecto, las cosas o negocios particulares son las materias de las que trata la disposición. El ser *“particulares”* denota la diferenciación con las *“disposiciones generales”*, y como la primera conserva los elementos de la segunda pero de modo más detallado al caso que expone la disposición especial, ésta es la razón jurídica por la que prima. Pero esta razón jurídica está expresada fundamentalmente en la frase *“cuando entre las unas y las otras hubiere oposición”*, lo que implica el problema de aplicación a un caso concreto, y donde dos disposiciones concurren en forma opuesta. El elemento diferenciador que contiene la disposición especial, por ser particular en la regulación del negocio o materia, prima para ser ésta quien regule el caso.

En consecuencia, la regla del artículo 4º inciso 2º del Código del Trabajo, al indicar que *“las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o*



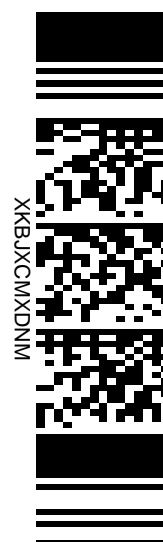
mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores”, constituye una norma de carácter general que regula los casos en que el empleador es una empresa y ésta es transferida a cualquier título, no obstante, tratándose de un traspaso efectuado por el sólo ministerio de la ley, consistente en el traspaso del servicio de educación pública, regulado por la Ley 21.040, es dicha norma la que debe prevalecer, pues, en sus artículos transitorios, especialmente el 34°, indica específicamente quien es el obligado al pago en el caso de deudas remuneracionales contraídas en una época previo al traspaso, siendo clara la mentada disposición que ello corresponde a las municipalidades.

Al determinarse que la norma especial contenida en la referida disposición transitoria es aplicable al caso concreto, corresponde interpretarla conforme al art. 19 del Código Civil, esto es, *“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”.*

Sobre el particular, dicha norma ha sido interpretada por dos instituciones facultadas legalmente para realizar tal interpretación; en efecto lo refiere la Contraloría General en su dictamen N° 4.282 de 2019: *“el párrafo 6° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.040 -en especial, el artículo trigésimo cuarto, letra ii, en relación con la letra a) del artículo trigésimo-; el mensaje presidencial de aquella ley -punto N° 9 del acápite III. Objetivos del Proyecto-, y lo informado por la Superintendencia de Educación en su oficio N° 44, de 2018, son concordantes, en orden a que las deudas originadas antes del traspaso del personal a un Servicio Local son de cargo del municipio o corporación municipal de que se trate”.* A mayor abundamiento, la Superintendencia de Educación en su oficio N° 44, de 2018, indica:

“Aquella consecuencia se ve refrendada no sólo en el contenido literal del mencionado inciso 2° del artículo noveno transitorio de la LNEP, que delimita la sucesión legal sólo a la calidad de sostenedor de los establecimientos educacionales que eran administrados por municipios o corporaciones antes del traspaso, sino que también en lo estipulado en el citado artículo decimoquinto transitorio, que condiciona la cesión de los contratos y convenios “con el exclusivo fin de asegurar la continuidad del servicio educacional.

Segundo, que en virtud de las disposiciones antes citadas, queda en evidencia la intención del legislador en orden de atribuir a los municipios y



corporaciones municipales la total responsabilidad respecto de los resultados de su gestión, lo que evidentemente incluye la obligación de responder de los hechos infraccionales ocurridos durante su administración.

Como se adelantó, el artículo trigésimo primero ya individualizado, es enfático en mantener la carga de la extinción de las obligaciones en el ente que las originó: “las municipalidades o corporaciones municipales (...) serán las únicas responsables de extinguir las deudas que subsistan con los beneficiarios de dichas leyes, por incumplimiento del pago de las mismas.”

Lo mismo ocurre con los saldos impagos por concepto de remuneraciones, obligaciones previsionales y pago de descuentos voluntarios adeudados, tanto a los profesionales y asistentes de la educación que se hayan desempeñado en establecimientos administrados directamente por los municipios o corporaciones municipales, como al personal que trabaje o haya trabajado en sus respectivos departamentos de administración. En este caso, el legislador obliga directamente al municipio o corporación a pagar dichas deudas, las que serán siempre de su exclusiva responsabilidad, y por tanto continuará siendo, para todos los efectos legales, la obligara al pago (...) hasta su total extinción” (artículo trigésimo cuarto transitorio de la LNEP).

La interpretación sostenida por la sentencia impugnada, infringe abiertamente las normas sobre interpretación de la ley, en particular el artículo 19 del Código Civil, toda vez que, siendo claro el sentido de la ley en cuanto a que las obligaciones por remuneraciones contraídas por las municipalidades, en este caso, devengadas durante los años 2018 y 2019, son de exclusiva responsabilidad de la entidad edilicia y no del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro.

En abono a lo referido en los párrafos anteriores, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia de fecha 24 de marzo de 2021, en la cual acogió un recurso de nulidad, en causa rol 1013-2020, expresando lo siguiente:

“Quinto: Que de las normas reproducidas en el motivo precedente es dable inferir que el Servicio Local de Educación no puede asumir el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas al personal docente y asistentes de la educación traspasado, y que tengan un origen anterior al convenio que implique el traspaso del servicio educacional, pues esas deudas previsionales corresponde pagarlas solamente a la Municipalidad o Corporación Municipal respectivas. Más aun, en caso de que aquello no se produzca, es el Ministerio de Educación Pública la repartición pública que debe cumplir con esa obligación, pudiendo lograr su reembolso de la Municipalidad o la Corporación Municipal, a través de los mecanismos que indica la Ley N° 21.040. Por ende, revistiendo esta normativa una ley especial que regula la forma de hacerse cargo de las deudas previsionales



del personal traspasado y determinando expresamente que no son los Servicios Locales de Educación los organismos llamados a enterar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas con anterioridad al traspaso del servicio educacional, como tampoco a disponer fondos en ese sentido para dar solución a las cotizaciones previsionales adeudadas por esos períodos, carece de legitimación pasiva el Servicio Local de Educación Barrancas, en esta causa, para poder ser emplazado, pues conforme a la normativa antes referida, son otras las instituciones llamadas a responder de la deuda previsional que denuncia la actora. Sexto: Que, por lo mismo, no resulta aplicable en la especie, el artículo 4° del Código del Trabajo, pues prevalece en la especie la preceptiva transitoria de la Ley N° 21.040, antes referida, a la cual cabe dar aplicación preferente, por tratarse de una Ley especial que regula las consecuencias del no pago de imposiciones previsionales y sus efectos respecto del personal traspasado de educación municipal.

Séptimo: Que, del mismo modo, al carecer el Servicio Local de Educación de Barrancas de legitimación pasiva, como lógica consecuencia, no le es imputable el incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo que le atribuye la demandante en su demanda de despido indirecto”.

Al sustentarse el fallo impugnado, en un sentido diverso al jurídicamente procedente, esto es, aplicando erróneamente los artículos transitorios de la Ley N° 21.040, extendiendo la normativa sobre principio de continuidad del empleador del derecho laboral común, a la situación que origina el litigio, se ha incurrido en infracción de ley, que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo desde que se ha procedido a acoger una demanda que era improcedente respecto a su representada. Ahora bien, si se hubiese aplicado la Ley N° 21.040, en el caso de marras, en la forma correspondiente, el sentenciador hubiese indefectiblemente acogido la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por su parte.

Además, si se hubiese realizado una interpretación armónica de las leyes que conceden el bono de desempeño laboral, se hubiese concluido que las funcionarias demandantes únicamente tenían derecho a percibir el correspondiente a los años 2020 y 2021, el cual fue solucionado como se indica en la sentencia definitiva de autos, lo que habría conllevado a rechazar la demanda, siendo el vicio de la relevancia necesaria para anular el fallo recurrido.

Pide se declare nulo el referido fallo y acto seguido dicte en su reemplazo una sentencia que rechace la demanda de cobro de prestaciones en todas sus partes o, en subsidio, se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por esta parte, con costas.



SEXTO: Que respecto del primer capítulo de impugnación, en cuanto a la improcedencia del pago del bono de desempeño reclamado por las actoras, efectivamente la sentencia definitiva recurrida, reconoce que durante el año 2022, el SLEPCH pagó el bono de desempeño laboral a las demandantes, correspondiente a los años 2020 y 2021, en la forma prevenida en la referida Ley 21.405 , así como cierto que Ley N° 21.405, reconoció expresamente en su artículo 29 que “Durante el año 2021, otórgase a los asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, dependientes de un servicio local de educación pública o dependientes de un Departamento de Administración de Educación Municipal, Dirección de Educación Municipal o Corporación Municipal de Educación, el bono a que se refiere el artículo 50 de la ley N° 21.109, según lo dispuesto en el inciso anterior”, lo que resuelve cualquier duda que hubiese podido plantearse acerca de la procedencia de su pago, no es posible e ella derivar, a contrario sensu, una conclusión tajante y definitiva acerca su procedencia en periodos anteriores.

SÉPTIMO: Que conforme lo señalado en la motivación que precede, no es posible concluir que por contener la ley N° 21.405 una norma específica como la del artículo 29 beneficiando a las actoras de autos, las leyes de presupuesto dictadas en los años anteriores no se las contemplaba como acreedoras de dichos bonos o asignaciones, pues tal como se concluyó en la sentencia recurrida, en su considerando décimo octavo, ya transcrito con anterioridad, en su numeral 1, establece que “1.- Que las demandantes prestan servicios en calidad de “asistentes de la educación”, términos generales que las hacen acreedora del bono de desempeño reclamado, no pudiendo, una ley posterior que ha precisado al sujeto titular del derecho, limitar al titular que se comprendía en la norma preexistente, por lo que solo es posible concluir que en el razonamiento del juez a quo vertido en los considerando vigésimo primero a vigésimo tercero, realizando un a análisis e las diversas leyes de presupuesto y por el que concluye del modo que lo hizo, haya incurrido en error al aplicar la ley que se denuncia en el recurso.

OCTAVO: Que en relación a las disposiciones transitorias de la ley 21.040 y la falta de legitimación pasiva del Servicio Local de Chinchorro, sostiene que los artículos, cuarto, undécimo, vigésimo primero, transitorios entre otros, de la Ley N° 21.040 y la historia del citado cuerpo legal, el servicio local es sucesor legal del municipio o corporación municipal respectiva, sólo en lo que respecta a la prestación del servicio educacional, sin que esto implique, que la calidad de sucesor legal, lo haga responsable del cumplimiento de las obligaciones contraídas por su antecesor, en este caso la I. Municipalidad de Arica., pudiendo



éstas ser pagadas por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública y descontadas al Municipio respectivo.

A este respecto, los considerandos trigésimo primero y trigésimo segundo, de la sentencia impugnada, señalan lo siguiente:

“TRIGESIMO PRIMERO: Que del análisis de la normativa citada, permiten concluir que el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro es el continuador legal del Departamento de Educación de la Municipalidad de Arica asumiendo la calidad de sostenedor y empleador de los funcionarios y personal de los establecimientos que dicho Municipio sostenía, incluidas las actoras, para todos los efectos legales. Conclusión que resulta además, concordantes con las disposiciones del Código del Trabajo en el inciso segundo de su artículo 4 en cuanto a que “Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores.” , norma que consagra el principio de continuidad de la empresa, el que consagra una forma de protección de los derechos y obligaciones de los trabajadores, a fin que no se vean alterados por acontecimientos que les son ajenos, como lo fue en el caso de autos la implementación de una nueva institucionalidad educacional en el que el Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad, esto es sin interrupción, incorporó al personal que le fuera traspasado en conformidad a la ley 21.040”.

“TRIGESIMO SEGUNDO: En conclusión, este juez, concluye que atendido que la demandante de autos, en su calidad de personal de establecimiento educacional, fue traspasada al Servicio Local de Educación Chinchorro, por el solo ministerio de la ley, sin solución de continuidad, de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 8° de las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.040, denominado " Del personal de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública" especialmente en lo dispuesto en el artículo cuadragésimo primero de la citada Ley y, teniéndose presente que la Ilustre Municipalidad de Arica fue notificada de la demanda de autos, el día 23 de julio del año 2021, fecha en la cual ya no existía vínculo jurídico alguno, entre la Municipalidad y las demandantes, sino que eran dependientes, del SLEP Chinchorro, se configura la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada Ilustre Municipalidad de Arica, por cuanto el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, es el actual sostenedor y empleador de las actoras”.



NOVENO: Que luego del análisis del artículo trigésimo cuarto transitorio, de la ley 21.040, referido al *“Informe financiero del servicio educativo municipal previo al traspaso”*, efectuado por el recurrente SLEPCH y conforme fue destacado en estrado por el abogado representante de la I. Municipalidad de Arica, el conflicto acerca del pago del bono reclamado se produjo con posterioridad al traspaso, es decir, no fue previsto por los demandados el pago referido,, pero toda esta indeterminación dejaría en un espacio oscuro a las actoras, en orden al sujeto contra el cual dirigir su demanda y hacer efectiva la responsabilidad que en el pago corresponde, apareciendo entonces de las alegaciones de la recurrente incluso una eventual sugerencia de dirigirse la acción contra un sujeto con quien técnicamente nunca fue establecida la relación laboral, pues el vínculo lo fue entre las actoras y la Municipalidad de Arica, y luego por disposición legal, y como continuador el SLEPCH, debiendo siempre primar el estatuto de protección a los trabajadores por sobre las cuestiones pendientes que pudiesen resultar de situaciones no previstas en la ley 21.040 y que regulan las relaciones entre los distintos entes del aparato estatal, ya sea municipales o dependientes del Ministerio de Educación .

De la forma señalada, no se advierte la infracción de ley que el demandado denuncia habiendo el sentenciador arribado correctamente a las conclusiones amparado en las normas legales invocadas en su sentencia

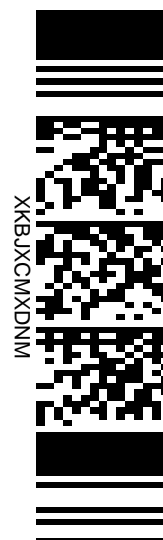
Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZAN LOS RECURSOS DE NULIDAD** deducidos por el abogado Claudio Fuentes Lira, por las demandantes, y el abogado Henry Yong Cerda, por la demandada Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, en contra de la sentencia definitiva de seis de septiembre del año en curso, dictada por Juez de Letras del Trabajo de Arica, don Sr. Hernán Valdevenito Carrasco, en la causa RIT O-122-2021, y, en consecuencia, se declara que la misma no es nula.

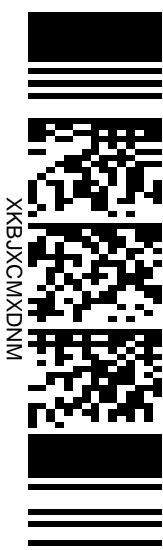
Regístrese, notifíquese y comuníquese vía correo electrónico.

Redacción del Ministro Marco A. Flores Leyton.

No firma el Ministro, don Marco Antonio Flores Leyton, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de feriado legal.

Rol N° 105-2022 Laboral Cobranza.





XKBJXCMDNDM

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por Ministro Pablo Sergio Zavala F. y Abogada Integrante Claudia Andrea Moraga C. Arica, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

En Arica, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

